

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO	ACCIÓN POPULAR
DEMANDANTE	MARÍO RESTREPO
DEMANDADA	CARLOS ANDRÉS MONSALVE MEJÍA Y/O ACTIVOS Y OPERACIONES INMOBILIARIA S.A.S.
INSTANCIA	SEGUNDA –APELACIÓN AUTO-
PROCEDENCIA	JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 31 03 015 2023 00018 01
PROVIDENCIA	INTERNO: 2023-40
DECISIÓN	AUTO INTERLOCUTORIO N°043
MAGISTRADA	DECLARA INADMISIBLE RECURSO DE APELACIÓN
PONENTE	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

En el presente asunto, el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medellín profirió auto el 03 de febrero de 2023 (Archivo digital 02. Primera Instancia), en el cual resolvió inadmitir la acción popular, con el fin de que se allegaran unos requisitos que estimó necesarios. Dicha providencia fue recurrida por el accionante en reposición y subsidio de apelación (Archivo digital 04. Primera Instancia).

El 22 de febrero de 2023 (Archivo digital 05. Primera Instancia) el juzgado emitió auto rechazando la demanda al estimar que no se cumplieron las exigencias, y, concedió la alzada, razón por la cual las diligencias fueron remitidas a este Corporación para decidir la segunda instancia.

Sometido el asunto al examen preliminar que manda el artículo 325 del Código General del Proceso, se advierte configurada la falta de los requisitos para la concesión del recurso; circunstancia ésta que deriva en la declaratoria de inadmisibilidad de la alzada.

CONSIDERACIONES

Bien claro se tiene que, en lo atinente a la procedencia del recurso de apelación opera el principio de taxatividad, conforme al cual, sólo son susceptibles de la

impugnación vertical aquellas decisiones que en estricta legalidad se les haya conferido tal posibilidad.

Tratándose de la interposición y concesión del recurso de apelación en decisiones adoptadas en acciones populares, como lo es la que su estudio nos convoca, de conformidad con la Ley 472 de 1998 que regula esa acción constitucional, las únicas providencias susceptibles de alzada son la sentencia de primera instancia y el auto que decreta medidas cautelares, procediendo frente a los demás autos sólo el recurso de reposición. Así se desprende de lo establecido en los artículos 26, 36 y 37 de dicha ley, que se citan en lo pertinente:

Artículo 26. Oposición a las medidas cautelares. El auto que decrete las medidas previas será notificado al demandado simultáneamente con la admisión de la demanda y podrá ser objeto de los recursos de reposición y de apelación; los recursos se concederán en el efecto devolutivo y deberán ser resueltos en el término de cinco días (...)

Artículo 36.- Recursos de Reposición. Contra los autos dictados durante el trámite de la Acción Popular procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en los términos del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 37.- Recurso de Apelación. El recurso de apelación procederá contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad señalada en el Código de Procedimiento Civil (...).

En el *sub lite*, el juez de primer grado decidió inadmitir la demanda; proveído frente al cual la parte actora interpuso recurso de apelación, decidiendo el juez de primer grado conceder la alzada en el efecto suspensivo, de donde se impone concluir que, no debió el *a quo* conceder el recurso de apelación, pues este es improcedente para el auto que inadmite la acción popular.

Sobre este tópico, de la improcedencia del recurso de apelación frente a autos dictados en el trámite de una acción popular, se ha pronunciado la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en sentencia de tutela del 10 de marzo de 2017 M.P. Margarita Cabello Blanco y del 14 de noviembre de 2017, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona:

En la primera providencia expuso la Corporación:

(...) De otra parte, en relación con los pedimentos del actor, respecto a que se le «conceda la alzada», hay que decir que los artículos 36 y 37 de la Ley 472 de 1998, prevén que «contra los autos dictados durante el trámite de la

Acción Popular procede el recurso de reposición», y que «el recurso de apelación procederá contra la sentencia que se dicte en primera instancia», entonces la ley especial que regula el trámite en esta clase de procesos, no estableció el recurso vertical para los autos que se profieran dentro del trámite las acciones populares.(...)

Y en la sentencia de noviembre de 2017, reiteró:

“Delanteramente, se advierte la inviabilidad del amparo por la desatención del presupuesto de subsidiariedad, pues el hoy quejoso no atacó la determinación de 13 de septiembre de 2017, a través del recurso de reposición, único procedente de acuerdo al canon 36 de la Ley 472 de 1998”.

En similar sentido, el Consejo de Estado, Corporación que no habitúa citar la suscrita por no ser el superior funcional en materia civil de este Tribunal, pero que, tratándose de acciones populares resultan muy ilustrativos y útiles sus pronunciamientos, al conocer dicha jurisdicción también éstas acciones constitucionales cuando se adelantan contra entidades Estatales, ha dicho esa Corporación:

“[E]n atención a la celeridad que debe caracterizar las acciones populares es claro que el recurso procedente contra las decisiones dictadas en el curso de este tipo de acciones es únicamente el de reposición, salvo lo dispuesto expresamente en los artículos 26 y 37 de la Ley 472 de 1998 respecto de las providencias a través de las cuales se dicta una medida cautelar y se profiere sentencia de primera instancia, decisiones estas que son apelables; sin que con dicha limitación se afecte en manera alguna el debido proceso o el derecho a la doble instancia conforme el análisis efectuado frente al punto por la Corte Constitucional. Entonces es esta la oportunidad para que la Sala Plena de esta Corporación reafirme la regla en comento según la cual, se insiste, las únicas decisiones apelables en acciones populares son el auto que decreta una medida cautelar y la sentencia de primera instancia, por lo que todas las demás decisiones que se adopten en el trámite de estos procesos son únicamente pasibles del recurso de reposición” (CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejero Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO. 26 de junio de 2019. Radicación número: 25000-23-27-000-2010-02540-01). (Resaltado intencional).

En conclusión, entonces, si la apelación como aconteció en este caso, no puede surtirse ante esta instancia, por tratarse de un auto que inadmite la demanda de acción popular, debe procederse en los términos del artículo 325 del Código General del Proceso a declararse inadmisibile el recurso y, devolver las diligencias al Juzgado de origen.

Ahora, la conducta procedente por parte del juzgado de primer grado era entonces, como se viene diciendo, no conceder la alzada, pero, en cumplimiento

del claro y contundente mandato del párrafo del artículo 318 del Código General del Proceso que establece: “*Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente*”, debió darle el trámite del recurso procedente, esto es, de recurso de reposición, conducta que no cumplió el *a quo*, porque de forma completamente inadecuada, decidió, **a pesar de estar pendiente un recurso contra el auto inadmisorio**, rechazar la acción popular y conceder la alzada, sin decidir por interpretación, como le correspondía, el recurso de reposición frente al auto inadmisorio.

Lo anterior impone entonces **declarar inadmisibile la alzada y ordenar la devolución del expediente al juez de primer grado para que adecúe su actuación al mandato del artículo 318 del C.G.P.** citado en el párrafo precedente.

Por lo expuesto, la **suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,**

RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE el recurso de apelación formulado y concedido a la parte demandante frente a la providencia proferida por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medellín el día 3 de febrero de 2023.

SEGUNDO. ORDENAR la devolución del expediente al Juzgado de origen, **para que el juez de primer grado adecúe su actuación al mandato del párrafo del artículo 318 del C.G.P.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO
Magistrada

(Firma escaneada conforme al artículo 105 del C.G.P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022)